

Editorial

La Universidad de El Salvador, un año cerrada

Una de las pruebas graves —entre otras tan graves como ella e incluso más— de la trágica situación que malvive El Salvador es el cierre del máximo centro de estudios hace ya un año. Efectivamente, el 26 de junio de 1980, tropas combinadas entraron a sangre y fuego en el recinto universitario dejando en su ataque cuarenta cadáveres y un centenar de heridos. No hubo combate y entre los agresores no se reportó una sola víctima. A un año de este gravísimo suceso, cuya importancia se agranda tras el alargamiento de su cierre y ocupación militar, queremos hacer unas reflexiones con un doble objetivo: diagnosticar, en primer lugar, qué pasa en El Salvador y por qué pasa; y, en segundo lugar, ayudar a encontrar un modo racional para que pronto la Universidad de El Salvador pueda contribuir con su aporte importantísimo al proceso del país.

Los motivos —porque razones nunca hubo— para intervenir militarmente la Universidad de El Salvador ya no se dan. No se dieron ni siquiera en el momento de la intervención. Se esperaba encontrar una fuerte resistencia armada y no hubo resistencia propiamente tal; se esperaba hallar depósitos de armas y, después de concienzudos registros, no apareció nada de eso; se esperaba descubrir refugios donde se escondieran combatientes guerrilleros o donde tuvieran sus cuarteles generales, y tampoco esto encontraron. ¿Por qué no se devolvió la Universidad a sus legítimas autoridades, una vez comprobada la falsedad de las presunciones y la nula amenaza militar que representaba?

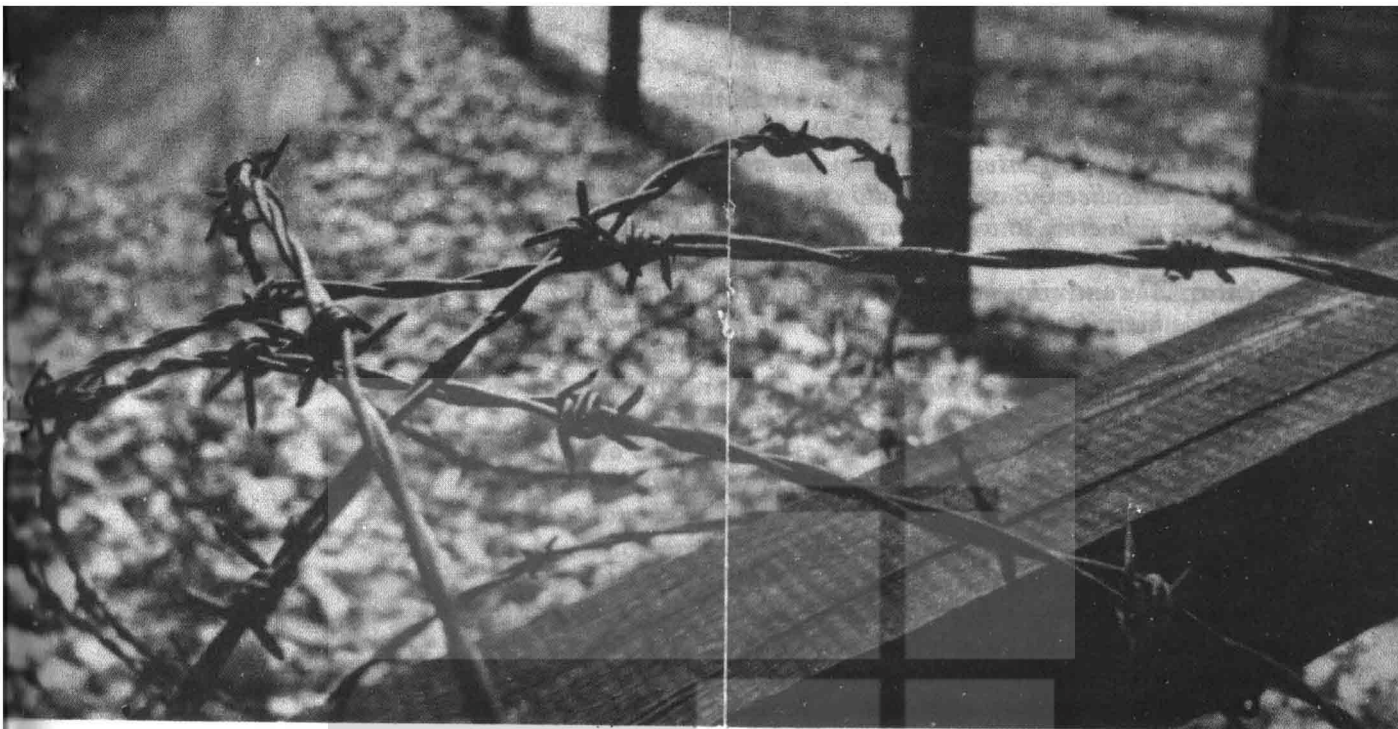
Se dirá que la Universidad constituía un peligro político al fomentar la subversión y la revolución. Aun suponiendo que así fuera, ¿por qué responder militarmente a un problema político?

Se argüirá que el cierre sí es una respuesta política y que el problema todavía subsiste, por lo que se hace necesario mantener el cierre. Pero ésta es una justificación falaz. Porque lo que habría que probar es que la prolongada clausura de hecho de la Universidad es una buena solución política al problema político que ella presenta. Si así fuera, estaríamos ante una disyuntiva o dilema igualmente condenador por sus dos partes: o bien la situación del país es tan desesperada que cualquier solución a alguno de sus graves problemas es también desesperada y lleva a consecuencias inadmisibles; o bien la actual Junta militar democristiana es incapaz de dar una respuesta razonable a los problemas reales que se le presentan.

1. El cierre de la Universidad de El Salvador como diagnóstico de la realidad nacional.

La Universidad de El Salvador es una de las fuerzas sociales más significativas del país. A estas alturas debería tener no menos de treinta y cinco mil estudiantes y de cinco mil empleados entre profesores, administradores y trabajadores; su presupuesto no debería andar por debajo de los setenta millones de colones. En sus manos estaban algunas carreras fundamentales que no son ofrecidas o apenas empiezan a serlo en otros centros universitarios de El Salvador. Si ella no está abierta, una gran parte de estudiantes de escasos recursos no tiene posibilidad práctica de acceder a los estudios universitarios por mucho que sea su talento y su voluntad de estudio. El resto de universidades no puede absorber ni de lejos el número de bachilleres que se gradúan. Sobre esto hay que considerar la necesidad de profesionales, la urgencia de investigaciones, la falta de instancias analíticas y tantas otras cosas que directa o indirectamente dependen de la Universidad. Hay que señalar finalmente el despilfarro de millones de colones en sueldos improductivos, no por culpa de los trabajadores, sino porque el Estado impide su trabajo, que es derecho constitucional de ellos y obligación constitucional de los poderes públicos.

Pues bien, esta gran fuerza social ha sido anulada. No importa que con ello se haga un gravísimo daño a decenas de miles de estudiantes y a varios miles de trabajadores; no importa que con ello se le prive a la sociedad de uno de los recursos imprescindibles a la larga para su constitución democrática y para su desarrollo económico; no importa que se malgasten los dineros del Estado y las mejores posibilidades de la nación. Nada de eso importa. O importa menos que la subsistencia y permanencia del actual gobierno o del régimen actual. Basta con que haya indicios o pruebas de una verdadera oposición política, que pueda salirse de control y representar un peligro real, para que eso mismo sea motivo no de corrección, sino de anulación, de aniquilación por el medio más expeditivo. No se ataca el mal en sí



mismo —lo que los núcleos en el poder entienden como mal— sino que se ataca y se destruye todo aquello que pueda ser sustentador del mal, aunque en su conjunto produzca otros muchos bienes y aun bienes mayores que los males supuestamente originados junto con esos bienes. Analicemos más de cerca este punto, porque es una de las pautas de la política actual, de su irracionalidad, de su injusticia y de su fracaso.

No puede negarse que la Universidad de El Salvador ha sido, era y tendría que seguir siendo una instancia política progresista. Si no es esto una necesidad histórica, es al menos una coyuntura histórica necesaria en situaciones como las que vive estructuralmente El Salvador. Los mismos hombres de la Democracia Cristiana que hoy están en la Junta y en el gobierno despertaron a su entonces progresismo político en las luchas universitarias. También es un hecho que muchos políticos de la oposición e incluso los jóvenes que adoptaron la línea revolucionaria a los comienzos del setenta y que hoy representan una buena parte de la dirigencia del FMLN y del FDR surgieron de la Universidad de El Salvador. Es también un hecho que buena parte de las organizaciones populares de masas contaron con el predio universitario y con sus instalaciones como uno de sus lugares de lanzamiento, y que ello causó problemas al desarrollo académico del trabajo universitario. Pero bien saben tanto los políticos que están en el Gobierno y que antes pasaron por la Universidad como los políticos y los comandantes que hoy están en la oposición, que esto resultaba prácticamente necesario. Sobre esta necesidad deben estar claros tanto los gobernantes como la opinión pública.

En primer lugar, es inevitable que los universitarios idealistas, indignados por la situación del pueblo y por la pésima conducción de los dirigentes, se sientan llamados a cambiar las cosas y se radicalicen. Basta para ello con poner en conexión la inteligencia y la ética universitaria con la verdad y la injusticia de la realidad nacional. No se trata primariamente de adoctrinamientos. Al contrario, se va a ciertas doctrinas, para el caso a las doctrinas marxistas, porque la realidad injusta de El Salvador, la realidad irracional que se abate sobre el pueblo salvadoreño, es resultado del capitalismo y es justificada con razonamientos capitalistas. Como reacción, entonces, y no como adoctrinamiento, se vuelven con facilidad los jóvenes intelectuales a doctrinas que sustentan un proceso revolucionario. Escandalizarse de esto, es como escandalizarse de la luz del sol o de los diluvios tropicales.

En segundo lugar, el que la Universidad como tal se convierta en santuario de la oposición política es un hecho continuado, que debe obligar a los dirigentes políticos y, sobre todo, a las autoridades militares a preguntarse por qué es así. La razón es sencilla, por más que no se quiera admitir fácilmente. En toda sociedad debe hacerse política y en El Salvador no hay otro lugar donde pueda hacerse, al menos política de oposición y, si se quiere, popular antes que revolucionaria. No se puede en los medios de comunicación copados por el capitalismo y el derechismo más reaccionario, cuando no cerrados por una censura estatal y privada imposible de saltar; no se puede hacerla tampoco en la calle mediante la movilización de masas, porque las manifestaciones callejeras, aun las fundamentalmente pacíficas, son aplastadas por los G-3 y por las metrallas y tanquetas; no se puede hacerla en el campo, donde está prohibida hasta la sindicalización; no se puede hacerla en las fábricas, donde se impide sangrientamente la constitución de sindicatos de clase y más sangrientamente todavía su actividad política; no se puede hacerla, en fin, a través de partidos políticos, porque sus locales son allanados o destruidos y sus dirigentes declarados terroristas por la Fuerza Armada, aunque sean acogidos por los más diversos gobiernos democráticos del mundo.

Pues bien, a esta gran fuerza necesaria para el desarrollo social y para la democratización del país se le impide funcionar durante más de un año porque se ha politizado. Nos encontramos así con otro gran problema del país, provocado por el propio Gobierno, mal enfocado y, consiguientemente, sin solución adecuada. En el caso de la Universidad de El Salvador, tenemos un paradigma de lo que son las actuaciones del Gobierno ante los problemas nacionales.

Hemos reconocido que la Universidad de El Salvador presentaba problemas y dificultades, como tantos otros sectores y fuerzas sociales del país. Pero el mal fue erróneamente diagnosticado por la Fuerza Armada y por la Junta militar democristiana.

na. Era un diagnóstico simplista que llevó a una solución descabellada: se juzgó que la UES era uno de los centros principales de la subversión comunista y que, por consiguiente, cerrándola y aterrizándola, se habría dado un golpe mortal a la revolución. ¿Ha sido así? Evidentemente, no. Tras un año de cierre de la Universidad, tras el asesinato de su Rector, tras el apresamiento de su Consejo Superior Universitario, tras el desperdiciamiento de las organizaciones estudiantiles, el movimiento revolucionario está más fuerte que nunca, aunque carezca ahora de la caja resonadora que era la UES. Apenas se ha ganado nada y, sin embargo, se ha perdido muchísimo: han perdido mucho los jóvenes universitarios que no pueden continuar o empezar sus estudios; han perdido mucho las familias salvadoreñas; ha perdido mucho el país entero. Sólo mentes ofuscadas pueden equiparar los presuntos bienes logrados por el cierre de la UES con los males ciertos seguidos de su intervención. Hasta puede pensarse que las filas guerrilleras se han alimentado de los universitarios a quienes se ha dejado sin ocupación y sin futuro.

La causa de este terrible error no se le escapa a nadie, porque es la misma que la de tantos otros errores: la militarización del problema y de su solución. El problema político de la UES fue visto y resuelto militarmente. Ahí están los resultados: la intervención a mano armada, a la que se plagaron sin escrúpulos los políticos de la Democracia Cristiana que tantas otras veces habían protestado por las intervenciones militares contra la Universidad, no ha solucionado el problema de la UES; tan sólo le ha dado muerte, que es otra cosa muy distinta. Y esto ha ocurrido, como con tantas otras cosas, poniendo de fachada al Partido Demócrata Cristiano, como si se tratara de una solución política y democrática. Nada de eso; se trata de una solución puramente militar y totalitaria. El problema del país no está en su politización, sino en su militarización, en que se enfoca todo desde el punto de vista militar, esto es, se lo mira con ojos militaristas y en función de resultados militaristas. Así nos va. Porque los planteamientos y soluciones militares a los problemas sociales y políticos constituyen una aberración.

Más en concreto, el cierre de la UES señala una línea de conducta general totalmente equivocada. Basta con que una institución —la Universidad, la Iglesia, los sindicatos, los medios de comunicación— produzca, aunque sea sólo como efecto secundario, cuestionamiento social, por más que produzca otros grandes bienes sociales, para que sea atacada y, si es posible, destruida o, al menos, neutralizada. Se camina así hacia la anulación de toda instancia social que pueda resultar problemática y crítica, no importa cuáles sean los costos sociales de esa anulación.

El modo como se ha querido suplir la falta de la UES muestra de nuevo la ceguera de quienes llevan en la actualidad la cosa pública. Ese modo ha consistido en el fomento indiscriminado de la apertura de universidades privadas. Esto puede re-

presentar la apariencia de una solución, pero no lo es. Como en tantos otros aspectos de la vida nacional, en vez de buscar soluciones reales se buscan sólo las apariencias de solución. Tras el cierre de la UES, se abren en el país seis universidades nuevas, precedidas poco tiempo antes por la apertura de otras tres. Si el mundo lo supiera, se reirían de nosotros; si la comunidad universitaria mundial lo supiera, lloraría por nosotros. Detengámonos un momento sobre este punto.

Es claro que la UES necesitaba un mayor grado de descentralización, ya iniciada con la apertura de los Centros Universitarios de Oriente y Occidente. A pesar de los estrechos límites geográficos de El Salvador, no es justo ni es conveniente traer a toda la población universitaria a San Salvador. Por otro lado, el crecimiento gigantesco de la UES, que pasó de unos 4,000 estudiantes en 1965 a cerca de 30,000 en 1980, generaba a la propia UES una serie de problemas académicos, organizativos y administrativos casi imposibles de resolver dentro del esquema vigente. Es también probable que por el sólo camino de las universidades estatales no fuera fácil encontrar la solución. Se daba por aceptado, aun en los mismos círculos académicos y políticos de la UES, que hubiera otras universidades no estatales, como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que constituían de hecho una solución parcial, pero verdadera e importante, al problema universitario de El Salvador. No toda universidad privada tenía que verse como opuesta a la universidad estatal y, menos, como no comprometida con las necesidades reales del país.



En principio, pues, la desmonopolización del quehacer universitario y la multiplicación de centros universitarios es algo positivo. Lo malo está en que se creen irresponsablemente universidades y en que se estime que esta multiplicación irresponsable resuelve el cierre de la UES. Ambos aspectos son sumamente graves y pueden sumir a la educación superior salvadoreña en un caos de fatales consecuencias

La fundación de una universidad requiere mucho pensamiento y planificación: requiere un examen concienzudo de las necesidades del país, una ponderación serena de sus recursos académicos y una cuidadosa programación de las etapas organizativas requeridas por una institución nueva, y más de la envergadura de una universidad. Para todo ello hace falta, además de recursos materiales, tiempo, reflexión y, sobre todo, un núcleo de académicos, preparado y experimentado, capaz de garantizar la seriedad del producto ofrecido así como la solidez y estabilidad de la institución en ciernes. ¿Cómo puede pensarse, en efecto, que de la noche a la mañana pueden abrirse seis universidades nuevas con un mínimo de responsabilidad? ¿Con qué infraestructura física, administrativa, organizativa, académica? ¿Con qué experiencia y tradición? ¿Es que las universidades se van a convertir en colegios de secundaria? ¿Es que basta una colección de títulos de licenciado, de títulos de primer grado universitario, para sentarse en una cátedra o, lo que es peor, para dirigir un departamento o una facultad? ¿También se va a dejar el "negocio" universitario al juego de la oferta y de la demanda? No olvidemos que mucha gente lo que quiere son títulos y no formación profesional y, menos aún, formación universitaria. Podrá decirse que pueden emplearse en estas nuevas universidades el saber y la experiencia de los profesores desalojados de la UES. Pero esta respuesta de apariencia razonable puede ser especiosa, porque lo que valía en la UES era más la estructura y la tradición institucional que muchos de sus profesores, quienes fuera de ella perderán sin duda eficacia, y porque muchos de los mejores de entre ellos no "podrán" ser utilizados para que no vuelvan a "politizar" a los universitarios.

Está, por otra parte, el intento de sustitución de la UES, al menos mientras duran las circunstancias políticas actuales. Este intento no sólo no logrará su empeño de hacer innecesaria a la UES, sino que supondrá un daño gravísimo para el país. Pensemos en la no utilización de la infraestructura de la UES, que en edificios, aulas, laboratorios, bibliotecas tiene invertidos millones de colones, cientos de millones de colones, que El Salvador no puede tirar por la borda ni siquiera dejar sin usar por meses y meses. Pensemos también en la enorme dificultad práctica de asimilar, fuera de las instalaciones de la UES, a treinta o cuarenta mil estudiantes; pensemos en la dificultad todavía mayor de dar posibilidades reales de educación universitaria a los estudiantes de menos recursos, que son la mayoría del estudiantado.

Pensemos finalmente que la UES es una de las fuerzas sociales que se necesitan para propiciar el progreso político de El Salvador, como lo demuestra la historia de nuestro país.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que la UES debe ser abierta y abierta cuanto antes. ¿Cómo?

2. La apertura de la Universidad de El Salvador, necesidad exigida por la realidad nacional.

No insistiremos en las razones académicas y económicas que exigen la apertura de la UES. Son evidentes. Vamos a plantear la exigencia de la apertura en términos políticos, pues son razones o sinrazones políticas las que se aportan para la inconveniencia de su apertura.

Partamos, sin embargo, de una concesión. Si el actual régimen de El Salvador se encuentra en sus últimos momentos ya sea en lo que se refiere a la actual alianza en el poder, ya sea en lo que se refiere a su política general de aplastamiento de la izquierda, el régimen y el Gobierno actual no verán razón alguna para abrir una institución que, cerrada, no les causa costos políticos a corto plazo. Si —segunda hipótesis— el actual régimen quiere poner toda su confianza en la fuerza militar, en la militarización del proceso hasta llegar al aniquilamiento físico del adversario como exigencia fundamental de su solución, tampoco tendrá por qué preocuparse a corto plazo por la apertura de la UES; seguirá con ello fomentando el descontento de una buena parte de la población, afectada por el cierre, pero mientras sigan activas las armas y alertas las bandas paramilitares, este descontento podrá ser controlado. En cualquiera de las dos hipótesis, no se ve conveniencia alguna que pueda convencer al actual Gobierno de la necesidad de la re-apertura.

Ahora bien, si se proclama que lo que necesita el país es una solución política, si se quiere que el pueblo y las distintas fuerzas sociales no ligadas directamente a la guerrilla expresen su voz, si se quiere iniciar un proceso de democratización que permita a corto plazo un proceso electoral, entonces no se ve con que razón se va a mantener cerrada la UES por más tiempo. Recordemos que desde las más altas esferas de la Junta y de la Fuerza Armada se prometió solemnemente un 15 de octubre de 1980 su apertura para antes de diciembre de ese mismo año. Esa promesa, como tantas otras, no se cumplió. Se calculó mal el plazo de pacificación o de aniquilación. Eso fue entonces. Pero ahora que se habla de democratización, de que la situación está perfectamente controlada, de que sólo quedan unos pocos reductos rebeldes en las montañas, de que todos pueden ver la normalidad del país, especialmente en las ciudades y, sobre todo, en San Salvador, ¿qué justificación queda para no abrir la UES?

Son muchos, incluso entre los políticos de la izquierda,

quienes reclaman la revitalización de diversas instancias sociales del país para que toda la disputa del país no quede reducida a una disputa armada y militar. Son necesarias distintas organizaciones y no sólo distintos partidos políticos que hagan conciencia en el país de la situación actual, que propongan soluciones, que den esperanzas, que vayan preparando respuestas efectivas. Las que más se hacen sentir por ahora son las que representan al capital salvadoreño, algunas organizaciones de profesionales próximas a ese capital y en muy corta medida la Iglesia. Pero por su propia naturaleza y por tradición histórica no pueden faltar las Universidades y, más en concreto, la UES, porque la UCA no se basta en esta tarea y menos en una situación en la que están suspendidos fundamentales derechos constitucionales, sin cuyo pleno ejercicio es ilusorio y engañoso hablar de democratización.

En este contexto que responde a la necesidad sentida y admitida de que las instituciones recuperen su especificidad, para contribuir desde ella con independencia a la solución política de la crisis que afecta al país, es como debe plantearse la reapertura de la UES. Puede y debe haber un compromiso, al menos tácito, de que la UES no va a sobrepasar los límites de su obligada vocación política, exigida y a la vez conmensurada por su esencia académica y de que la Junta y la Fuerza Armada van a respetar la autonomía universitaria, incluso cuando desde la especificidad universitaria sean criticadas y aun combatidas ideológicamente. Se dirá que esto supone una ganancia para la izquierda y ninguna para el Gobierno; pero el problema está mal planteado en esos términos. Los términos correctos es si la apertura, con ese pacto tácito, favorece o no a la totalidad del pueblo salvadoreño de una manera sustancial. Y esto parece evidente. Se puede objetar que no hay garantía de que la UES no vaya a convertirse en un santuario guerrillero desde el que se lancen ataques contra objetivos militares del área metropolitana. Pero esa objeción no fue válida ni siquiera hace un año; lo sería hoy mucho menos, tanto porque la guerrilla ya tiene sus propios santuarios mucho más seguros, como porque a la Fuerza Armada le sería más fácil vigilar para que esto no sucediera. Por otro lado, el temor ya tan confirmado de una nueva intervención militar reduciría al mínimo la posibilidad de que la UES pudiera representar peligro militar alguno.

Podría favorecer eso sí la movilización de las masas y, en general, la movilización política. Pero si ésta se hace en términos racionales, mucho más moderados de lo que fueron en ocasiones anteriores —y qué otro remedio queda, si se analiza realísticamente la actual situación de El Salvador—, ¿qué dificultad hay para que esto suceda, una vez que se habla de proceso de democratización y de solución política? ¿O es que no hay otro acto legítimamente democrático que el de meter una papeleta en una urna? ¿Acaso el acto mismo de la votación puede tener algún sentido democrático, si no ha sido precedido de una verdadera ac-

tividad política, en la que deben participar todas las instituciones serias del país, cada una según su naturaleza y condición?

Enténdasen bien. No estamos defendiendo ni siquiera la posibilidad democrática de unas elecciones en la actual coyuntura. Por lo menos a corto y mediano plazo. Argumentamos, como decían los lógicos, ad hominem, esto es, tomándoles la palabra a quienes dicen que la solución política de El Salvador debe venir a través de las elecciones. ¿Será necesario que la UES esté cerrada por lo menos dos años para que puedan darse en el país elecciones libres? ¿No es esto un absurdo? Más aún, nos atreveríamos a decir que si las elecciones y/o la subsistencia de un gobierno exigen que la Universidad Nacional con su obligación de atender en ese plazo a más de cuarenta mil estudiantes deba estar cerrada, esas elecciones y esa subsistencia están injustificadas.

Lo que estamos defendiendo es que se abra la UES para que se robustezcan instancias sociales que pueden llevar a una solución mucho menos polarizada de la que se prevé actualmente. Lo que estamos proponiendo es que la UES, dejando para otras instancias revolucionarias acciones no puramente ideológicas, entre a ser una de esas instancias sociales, moderadoras del proceso de transición.

“Por una universidad al servicio del pueblo salvadoreño”



Esto supone un desafío y una prueba tanto para el Gobierno como para la oposición. Para el Gobierno, porque la apertura de la UES supondría la comprobación de su voluntad democrática, mientras que el cierre continuado supondría su incapacidad política para la conducción del país y la falsedad y/o limitaciones de sus propuestas de solución política. Para la oposición, porque la apertura les daría la oportunidad de mostrar también su talante democrático y su voluntad de respetar la especificidad de instancias, que no deben ser quemadas ni siquiera manipuladas al arbitrio de voluntades inmediatistas, que sólo pondrían su confianza en la lucha armada y en la insurrección popular.

Prueba que exige garantías. El Gobierno y la Fuerza Armada deben garantizar que la reapertura de la UES no iba a suponer la ocasión para una nueva caza de brujas, un nuevo rosario de muertes y de atropellos. ¿O es que tampoco están la Junta y la Fuerza Armada en condiciones de garantizar la seguridad de los miembros todos de la comunidad universitaria? ¿O es que no son capaces de distinguir entre lo que es lucha ideológica legítima y lo que es atentado contra el orden público o contra la legítima seguridad del Estado?

Creemos, por otra parte, que las actuales autoridades de la UES, sus cuerpos colegiados, muchos de sus profesores ofrecen suficientes garantías para echar a andar una Universidad. Muy



difícil les va a ser por el daño que ya se ha cometido contra ella; pero cuanto antes se comience será menos difícil. Por la cuenta que les trae ellos mismos cuidarán dentro de lo posible para que la UES no se les vaya de las manos, para que empiece a restañar sus heridas y pueda empezar a dar servicio en tiempo prudencial a los miles de estudiantes y padres de familia que esperan iniciar o reemprender los estudios universitarios.

Si ni siquiera esta pequeña apertura democrática —tan necesaria, justa e inaplazable— es posible en El Salvador, ¿qué tipo de solución política es ya posible?

La Universidad de El Salvador tiene un largo y glorioso historial de cierres. Casi siempre —por no decir siempre— fueron los militares, no universitarios, quienes decidieron su cierre porque la actividad crítica de la Universidad les resultaba ininteligible e intolerable. Ya el General Gutiérrez la tuvo cerrada de 1897 al 20 de septiembre de 1898. El Coronel Molina, que asumió fraudulentamente el poder tras unas elecciones ganadas por Duarte y Ungo, también intervino militarmente la Universidad y la mantuvo cerrada durante más de un año. Ha tocado a la Junta militar democristiana, en la que ahora está el propio Duarte, intervenir de nuevo militarmente el recinto universitario y mantenerlo cerrado ya durante un año; año en el que, además, fue asesinado su Rector, Félix Ulloa y fue apresado el Consejo Superior Universitario en pleno, aunque pronto se le pusiera en libertad.

Nunca se sacaron bienes de esas intervenciones y cierres. Desde luego se sacaron más males que bienes. Sin embargo, se sigue en la misma práctica errónea y, además, injusta. Por el bien de la educación universitaria, académica y profesional de más de treinta mil estudiantes, que no pueden ser asumidos por las otras Universidades; por el bien del país que necesita urgentemente acciones realmente democratizadoras y poderosas instancias sociales democráticas; por el buen nombre de El Salvador en la comunidad internacional, académica y política, pedimos la pronta reapertura de la Universidad de El Salvador, el respeto a su autonomía, la salvaguarda de su seguridad. Deben emprenderse cuanto antes conversaciones serias entre las autoridades estatales y las autoridades universitarias para buscar el modo más pronto y seguro de reemprender la actividad difícil pero necesaria, problemática pero constructiva, de la Universidad de El Salvador.

26 de junio, 1981